

**LO QUE PASA**  
**FRANCISCO J. FERNÁNDEZ\*****Más allá de hoy**

**B**uena parte del futuro de los laboratorios de genéricos estará en los biosimilares. Y el coste de desarrollar un biosimilar es mucho mayor (así como diez veces más, según fuentes de la industria) que el de un EFG. Ante ese futuro, si los países quieren disponer de biosimilares, con los que poder beneficiarse de precios más bajos, deben contar con empresas potentes, capaces de afrontar grandes inversiones.

Quien lanzaba este mensaje días atrás, en el III Foro Cofas, no era un representante de la industria de EFG, sino el presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol. Y lo hacía para criticar con dureza una política de fármacos *cortoplacista*, que permite disfunciones como que pequeñas empresas, con limitada cobertura de mercado ("compañías desesperadas"), condicionen los precios, bajándolos hasta niveles insostenibles para laboratorios grandes, que son los que garantizan el abastecimiento.

Y es la foto fija, la imagen del presente. Quedan al margen los efectos a medio y largo plazo, que deberían ser pieza esencial de cualquier política que se tome en serio.

Una decena de laboratorios copa el 90 por ciento del mercado español de genéricos, según datos de IMS. Pero compiten por esa tarta un centenar de empresas. No se van a discutir aquí las bondades de la competencia, pero las cifras cantan. No tiene sentido que alguien con un 0,1 por ciento del mercado marque el precio para todos.

La solución no parece difícil. Hay que fijar unas garantías mínimas de presencia y cobertura de mercado. Así no harían falta parches, como las *repescas*.

Falta una política sanitaria a largo plazo, clamaba en estas páginas la semana pasada el secretario general del grupo de farmacia de la Unión Europea (PGEU), John Chave. Lo decía del ámbito europeo, y España no se libra. En el caso del fármaco hay que dejar de engañarse: es difícil pensar que el problema está en el precio. El 75 por ciento de las unidades tiene un PVP inferior a diez euros, según Farmaindustria. Y el 50 por ciento, inferior a cinco. El gestor público ha de conseguir el precio más bajo posible, pero por una cuestión de justicia y buena gestión, no porque ahí esté la solución a los problemas de la sanidad ni dejando de lado una mirada al futuro de la prestación farmacéutica, en la que juegan un papel importante los laboratorios, como los distribuidores y las farmacias, otros damnificados de una política de precios que puede rozar lo insensato.

Pese a todo, desde los laboratorios (innovadores y de genéricos) se insiste en que no están en contra de las bajadas de precios, siempre que no sean artificiales y que se fijen con unas reglas de juego constantes.

Los desesperados cambios de reglas sobre la marcha (ahora prescripción por principio activo, ahora por marca; ahora precio menor, más bajo, seleccionado; ahora revisión al semestre, al trimestre, al mes...) ponen en duda que exista política alguna en farmacia más allá del puro tijejetazo. Y se sabe que los botiquines rebosantes y las toneladas del Sigre, como *imágenes* (sesgadas) que desde la Administración se usan para explicar los recortes, no tienen que ver con el precio, sino con otras cuestiones, como un exceso de recetas o la falta de concienciación sobre el uso del fármaco, a su vez asuntos que exigen soluciones complejas y, desde luego, no a corto plazo.

Pero, más allá, están dañando a una industria que, en suma, pide un horizonte que, por difícil que sea, le permita plantear una estrategia, invertir y, como debe hacer toda empresa, crear riqueza para ella y para el país.

**ES DIFÍCIL PENSAR  
QUE EL PROBLEMA DE  
LA FACTURA PÚBLICA  
EN FÁRMACOS SEA EL  
PRECIO SI, COMO DICE  
LA INDUSTRIA, EL 50%  
DE UNIDADES CUESTA  
MENOS DE 5 EUROS**